

NÚMERO: 224 / 2020

 Unidad Administrativa
**Área de Gestión de la
Contratación**

Exp.: ECON/000103 /2020

Resolución de la *Consejera Delegada de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid*, por la que se procede a declarar la emergencia en la tramitación del expediente denominado **“SERVICIOS DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y EL DISEÑO Y DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EXCEPCIONALES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA HACER FRENTE A LA CRISIS DEL COVID-19 Y FUTURAS PANDEMIAS, POR TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA”**

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas según lo dispuesto en el *Artículo 10.8.2 b) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas*, y de conformidad con lo que establece el *Artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)*, y demás disposiciones de aplicación, y visto el informe de la Dirección de Innovación y Transformación Digital de Servicios,

RESUELVO

1. Declarar la Emergencia en la tramitación del expediente, conforme al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para la contratación de los **“SERVICIOS DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y EL DISEÑO Y DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EXCEPCIONALES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA HACER FRENTE A LA CRISIS DEL COVID-19 Y FUTURAS PANDEMIAS, POR TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA”** por los motivos que se indican a continuación:

Con fecha 31 de enero de 2020, la OMS declaró el brote de SARS-CoV-2 como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. Los primeros casos en la Comunidad de Madrid se confirmaron el 26 de febrero. Desde esa fecha hasta la actualidad el ascenso en el número de casos confirmados ha sido exponencial, y según los modelos dinámicos para predecir la onda epidémica del COVID-19, si no se toman medidas de distanciamiento, el número de casos confirmados podría ascender a una cifra difícilmente asumible.

De acuerdo con lo previsto en el artículo primero de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, las distintas Administraciones públicas, dentro del ámbito de sus competencias, al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, pueden adoptar las medidas previstas en la citada Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.

Ante la situación de emergencia de salud pública y pandemia internacional, el Gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE núm. 67).

El artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, establece que la adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. De acuerdo con esta previsión, a todos los contratos que hayan de celebrarse para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia.

La Disposición Adicional Primera del Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, habilita al Ministerio de Política Territorial y Función Pública y a los competentes en las comunidades autónomas y entidades locales para dictar las instrucciones y resoluciones que sean necesarias para regular la prestación de servicios de los empleados públicos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del



Empleado Público, con el objeto de mantener el funcionamiento de los servicios públicos que se consideran esenciales en el Anexo que acompaña a este Real Decreto- Ley. En concreto en su apartado 13, el referido Anexo considera como esenciales:

Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.

Ante la situación actual en España, y dado que la extensión temporal del estado de alarma se prevé que se alargue en el tiempo, es imprescindible la adopción de medidas excepcionales de transformación digital del Sector Público de la Comunidad de Madrid para hacer frente a la crisis del Covid-19 y futuras pandemias.

En la actualidad, la Comunidad de Madrid considera necesario, poner en marcha un ambicioso proyecto que permita ir desarrollando aplicativos y medidas informáticas y tecnológicas concretas que vayan impulsando la recuperación de la sociedad, y preparen el funcionamiento de la Administración regional ante futuros brotes o repuntes de la pandemia, servicio éste identificado como crítico, que necesariamente debe estar en funcionamiento desde abril.

Todo ello, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 120 de la LCSP, que regula un régimen excepcional de actuación para el caso de que la Administración tenga que actuar de manera inmediata ante situaciones críticas, justifica la contratación mediante tramitación de emergencia de los servicios de oficina de gestión de proyectos y diseño y desarrollo de herramientas y dispositivos tecnológicos para la adopción de medidas excepcionales de transformación digital del Sector Público de la Comunidad de Madrid para hacer frente a la crisis del covid-19 y futuras pandemias.

Por todo ello, teniendo en cuenta la imposibilidad de llevar a cabo la contratación del servicio mediante tramitación ordinaria o urgente, es necesario dar respuesta de manera eficaz y con las garantías requeridas, evitando así causar perjuicios en la prestación de este servicio público considerado como esencial.

La tramitación de emergencia que se acuerda se fundamenta, por consiguiente, en la imperiosa y urgente necesidad de contar con los servicios referidos para cubrir las necesidades críticas manifestadas, justificación suficiente para la aplicación de la tramitación de emergencia, tanto desde el punto de vista formal como material.

2. Ordenar la ejecución de las actuaciones necesarias para adoptar las medidas pertinentes con la finalidad de contratar los servicios que permitan ir desarrollando aplicativos y medidas informáticas y tecnológicas concretas que vayan impulsando la recuperación de la sociedad, y preparen el funcionamiento de la Administración Regional ante futuros brotes o repuntes de la pandemia, con un plazo estimado de 4 meses.
3. Proceder a la contratación de los servicios referidos, con la empresa DELOITTE CONSULTING, S.L.U. de acuerdo con la siguiente imputación presupuestaria:

CONCEPTOS	TOTAL
Cuota Fija	39.782,40 €
Cuota Variable	127.322,49 €
Base Imponible	167.104,89 €
21% IVA	35.092,03 €
Importe Total, IVA Incluido	202.196,92 €

Madrid, a fecha de firma
LA CONSEJERA-DELEGADA